

# EL RÉGIMEN POLÍTICO DE LAS NUEVAS DEMOCRACIAS EXCLUYENTES DE AMÉRICA LATINA. ARGENTINA 1999-2001

Alfredo Raul Pucciarelli

CONICET/Universidad de Buenos Aires, Argentina

Recibido: 11-01-2005 / Revisado: 18-04-2005 / Aceptado: 12-06-2005 / Publicado: 21-09-2005

**Resumen:** Este artículo defiende la tesis de que existe una dualidad entre la estabilidad republicana, la participación electoral y el respeto de la soberanía popular que se presentan en el plano político argentino y la realidad del prolongado y complejo proceso social de decadencia, empobrecimiento, fragmentación y segmentación que viene sufriendo la mayoría de la población de este país desde mucho tiempo atrás. Se expone el viejo dilema histórico de la democracia: la creación de un punto de equilibrio posible entre la generación permanente de posiciones sociales desiguales y asimétricas y la proclamación, también permanente pero incongruente, de derechos igualitarios en el ejercicio de la política. El autor va enumerando, desde la noción de democracia excluyente, los flancos de la situación de crisis política: pérdida de legitimidad, descrédito institucional, prácticas heterodoxas y el mensaje posibilista. Se describe la grave crisis de la democracia provocada por la virtual extinción de los antiguos pactos de representación. Se ha producido un vaciamiento de las ideas, propuestas y estrategias políticas. La ideología posibilista es quien se ha encargado de sustituir el espacio dejado tras de sí por las prácticas democráticas tradicionales, si bien a costa de reducir los horizontes de pensamiento y acción políticos a la cuestión de la competitividad electoral.

**Palabras clave:** Argentina, crisis política, democracia, polarización social, segmentación social.

---

Alfredo Raul Pucciarelli  
Miembro del Instituto de Investigaciones G. Germani. CONICET/Universidad de Buenos Aires, Argentina.  
E-mail: arpu@uolsinectis.com.ar.

## 1. LA DEMOCRACIA EXCLUYENTE

Con el último traspaso presidencial de fines de 1999, el régimen democrático en la Argentina parecía haber aventado definitivamente los viejos fantasmas que determinaron su crónica inestabilidad durante más de medio siglo y finalizado un largo y complejo período de transición. El sistema institucional vigente tenía una serie innumerable de limitaciones pero se mantenía estable, funcionaba razonablemente bien y parecía prácticamente consolidado. De ese modo, la estabilidad republicana, la participación electoral y el respeto de la soberanía popular se presentaban en el plano político como el polo opuesto del prolongado y complejo proceso social de decadencia, empobrecimiento, fragmentación y segmentación que venía sufriendo la mayoría de la población desde mucho tiempo atrás.

Se trataba de una nueva edición de la clásica contradicción entre sociedad y política que arrastran en todas las circunstancias los regímenes democráticos que no ha encontrado resolución todavía. Por esa causa impone, entre otras la siguiente interrogación ¿cuál es la naturaleza del vínculo que se ha ido estableciendo a lo largo de la última década entre el proceso de empobrecimiento y exclusión social provocado por la implantación de un nuevo tipo de “capitalismo salvaje y depredatorio” y el renovado proyecto de participación ciudadana asociado a la construcción de un nuevo tipo de régimen político democrático, estable, legítimo y dotado de capacidad para gobernar?

Dicho de otro modo, la creciente insatisfacción social de una porción cada vez mayor de la población, no expresada todavía en claros términos políticos, genera un nuevo tipo de amenaza que reinstala, de un modo acuciante y diferente, el viejo dilema his-

tórico de la democracia: la creación de un punto de equilibrio posible entre la generación permanente de posiciones sociales desiguales y asimétricas y la proclamación, también permanente pero incongruente, de derechos igualitarios en el ejercicio de la política.

O la igualdad política trasciende su propio ámbito y se legitima al promover desde el Estado la disminución de la desigualdad social o, por el contrario, la desigualdad social se exagera, poniendo aún más distancia real respecto de los postulados igualitarios de la proclama liberal-democrática y generando demandas por dentro y por fuera del sistema institucional que inducen, a su vez, un nuevo proceso de degeneración del sistema democrático.

Amortiguada la lucha contra la amenaza del golpe militar y también, por ahora, contra la militarización del régimen político que caracterizó períodos anteriores, la democracia perdura, se fortalece y se legitima, en la actualidad de un modo paradójico: vaciándose de contenido y desnaturalizando sus objetivos. Ya no pensamos, como en la década del ochenta, en la existencia de democracias “bobas”, “imperfectas”, “impotentes” o “de baja intensidad”; tampoco en democracias sólo corruptas e ineficientes enganchadas por complicidad o comprometidas por omisión con la degradación social, sino en otra cosa sensiblemente diferente: en la expansión de un nuevo entramado político institucional que, acompañando la exclusión social con la expropiación y el despojo de todo aquello que constituye la identidad social, cultural y política de los sectores subalternos, se transforma en un estratégico instrumento de producción del proceso de declinación económica, decadencia social y descomposición institucional que ha venido sufriendo el país durante los últimos 25 años.

En este caso, el término general “expropiación” no se refiere a la ganancia que surge de la explotación del trabajo ajeno, propia de la organización social de la producción capitalista, ni a ninguna otra forma de apropiación “tradicional” asociada a ella, sino al “despojo”, es decir a la exacción de bienes ya obtenidos y a la eliminación de conquistas sociales ya consagradas, consideradas una parte del sistema de pertenencias de los sectores sociales expropiados, los “despojados”. Aunque la mayor cantidad de bienes expropiados son de carácter económico

(ocupación, salario directo, salario indirecto, etc.) los procesos que culminan en la exacción y el despojo no son procesos predominantemente económicos, son fundamentalmente políticos estatales.

A pesar de ello, todavía no se ha analizado el papel que ha jugado el régimen político del sistema propiamente democrático en la realización de esos objetivos, eliminando resistencias potenciales y haciendo definitivamente viable un severo plan de reformas estructurales que, a pesar de atentar directamente contra el sistema de intereses económicos, sociales, políticos y culturales de los sectores populares, fue impuesto sin generar oposiciones serias ni conflictos perdurables. Esa gran ausencia explica, seguramente, el hecho de que no se haya visualizado todavía un hecho fundamental para la adecuada comprensión de la relación entre sociedad y política en nuestra época: a diferencia de otras formas de exacción del trabajo ajeno, la “expropiación” genera “despojo” a través de mecanismos explícitos que no pueden mantenerse velados ni ocultos, como sabemos que ocurre con los primeros. Por esa razón, el elenco gubernamental ha debido desarrollar complejas estrategias políticas y discursivas que, en la aparente simplicidad con que se presentan, ocultan una hasta ahora indescifrable red de pactos secretos, relaciones espurias y diversos tipos de anormales y amorales arreglos interinstitucionales, como la ha demostrado, entre otras tantas cosas, el denominado “escándalo de los sobornos en el Senado de la Nación” (Rígoli, 2000).

Sabido es que durante toda la gestión menemista, y aún en el momento actual, la clase obrera y los sectores más directamente perjudicados por la aplicación sistemática de “políticas de expropiación”, sirvieron de soporte político-electoral del nuevo bloque social dominante dirigido por el menemismo y que dieron consenso explícito a la dirección neoliberal-conservadora, adoptada por el gobierno durante toda la década del noventa. Sostuvieron pertinazmente con su opinión, con su desmovilización, con su retaceado apoyo a los tímidos intentos de oposición, generados por algunos grupos sindicales, movimientos sociales y pequeños partidos políticos minoritarios la orientación política del gobierno peronista y, cada vez que fueron convocados, apoyaron con su voto la implantación de medidas específicas que redujeron brutalmente sus anteriores conquistas. Hace un tiempo, Luiz Ig-

nacio Lula da Silva, después de su última derrota electoral como candidato a presidente del Brasil, planteó tal contradicción bajo la forma de un interrogante. Parafraseando sus términos podría presentarse del siguiente modo ¿Por qué razón en este encuadre democrático actual, las víctimas pierden su propia memoria, olvidan su trayectoria, desestiman las propias luchas del pasado y apoyan políticamente o votan periódicamente a sus verdugos directos y más evidentes? O, planteando la misma cuestión con una perspectiva diferente: ¿cómo actúa la política y el gobierno democrático para orientar conductas que atacan los propios intereses de las clases populares, logrando el apoyo a movimientos, partidos y candidatos que los contradicen explícitamente?

Llevada a su límite, la política expropiadora diseñada por nuestro Estado y ejecutada por una gran variedad de actores diversos, genera en los sectores más desposeídos de la sociedad una grave situación de exclusión temporal que se está convirtiendo últimamente, al calor de los sucesivos planes de ajuste y reiteradas crisis económicas, en una grave situación de exclusión permanente, en pleno proceso de expansión. La lógica del despojo amplía el campo de la pobreza, transforma una parte de la pobreza en indigencia y marginalidad y a la marginalidad indigente en exclusión. Por esa causa, es sumamente probable que uno de los rasgos definitorios de la sociedad argentina del momento actual y fuente de una gran variedad de problemas sociales diversos tenga plena relación con la construcción de situaciones de exclusión, en las que se combinan en forma diversa la privación material y el despojo de su autonomía personal y de todo aquello que formaba parte de su poder simbólico. Por lo tanto, el despojo viene a ser respecto del modelo político-democrático, lo que la corrupción al modelo corporativo-estatal; el empobrecimiento-exclusión al proceso de decadencia social y la desocupación, el endeudamiento, la concentración-extranjerización del capital, etc., al modelo de acumulación neoliberal.

Para hacer patente la enorme responsabilidad que tiene la producción política democrática en ese proceso, es decir en la articulación que hoy observamos entre despojo material y despojo simbólico de los sectores populares, denominamos "Democracias Excluyentes" a este nuevo tipo de demo-

cracias productoras de diversas modalidades de marginalidad, indigencia y exclusión social.

## 2. LA DEMOCRACIA EXCLUYENTE Y LA CRISIS DE LA POLITICA

El modo de hacer política que sustentó el proceso de consolidación del sistema democrático durante su último período de reconstrucción, ha generado una enorme cantidad de contradicciones y para la mayoría de los analistas políticos se halla sumergido, ahora, en una grave crisis provocada por la virtual extinción de los antiguos pactos de representación, lo cual pone, a su vez, en crisis al núcleo central del sistema democrático. En el pasado, la representación política se construyó a partir de grados relativamente altos de articulación entre los partidos políticos y las identidades sociales colectivas que, a través de un complejo proceso de interacción, realizaron el trabajo de lo que se ha denominado "agregación de demandas", un vasto sistema interactivo que transformó en símbolos, rituales, ideas y proyectos políticos a las aspiraciones más o menos difusas que surgieron en su seno. Por esa causa, el pacto implícito de delegación de poder que contenía la representación electoral se hallaba pleno de contenido, no era el producto exclusivo de una campaña electoral, era el punto de llegada de una larga historia de mutua compenetración entre los grupos y los partidos y, a la vez, el comienzo de una fase superior por la cual el trabajo institucional del "representante" permitía establecer, generalmente, condiciones favorables para un posible pacto futuro. (Novaro, 1999; Hagopian, 2000).

En nuestras democracias actuales, ese vínculo se ha transformado, se ha desnaturalizado, se ha desvanecido o, en los casos más extremos, ha sido sencillamente eliminado. La modificación radical que se ha producido en el mundo de los representables (heterogeneización de las estructuras sociales, disolución de las antiguas identidades de clase, desvanecimiento de antiguos actores sociales, cambios en el contenido y en la diversidad de las demandas, etc.) ha modificado el sentido y, especialmente, la dirección de la representación, concebida como agregación de demandas producidas en el seno de la sociedad. Sin negar que este complejo conjunto de factores esté condicionando el contenido y la dinámica de la política en democracia,

gravitando cada uno de ellos de un modo que será necesario investigar sistemáticamente en el futuro, nosotros queremos resaltar que los aspectos más determinantes del cambio de lo político y de la política, en el momento actual, son diferentes y deben ser pensados con otra perspectiva analítica.

El análisis del vaciamiento de las ideas, propuestas y estrategias políticas que ha difundido el periodismo especializado y ha analizado más sistemáticamente un pequeño conjunto de trabajos académicos, debe considerarse rigurosamente válido si con ello se hace referencia a la política pública, es decir, al modo en que se entrecruzan discursos, imágenes, acciones y actores en ese escenario predominantemente massmediático que hoy convoca pasivamente a la mayor parte de la ciudadanía. Utilizando nuevas estrategias, sobresaturadas de imágenes, vaciadas de información sustantiva y reflexiones enriquecedoras, los mensajes políticos inscriptos en el espacio público entremezclan, confunden y, en definitiva, escamotean precisamente todo aquello que resulta esencial e imprescindible para “comprender”, para definir problemas, para identificar necesidades, para ubicar interlocutores, para apelar a instituciones, para construir organizaciones, para generar conductas y proyectar acciones. De ese modo, la política pública que sustenta la reproducción de las leyes del juego democrático ha sido despojada y el espacio público, espacio de intercambios, confrontaciones, luchas, elaboración de proyectos y definición de problemas en el pasado, está vacío, ya no tiene relevancia ni puede generar nuevos significados capaces de contrabalancear el efecto devastador que ha tenido el arrollador avance del espectáculo electoral telemático, las estrategias de marketing y el reemplazo de la opinión-participación militante, por los sondeos de opinión y la encuestología. (Pasquini Durán, 2001).

Pero la crisis de la práctica política pública en democracia, no obedece a una crisis de definición de la política misma como instrumento de elaboración de proyectos o, aún más, como elemento sustantivo de transformación de la realidad, tal como lo plantean Garretón y Lechner en los trabajos ya citados, sino que la crisis es una imagen, el rasgo más sobresaliente, el modo más directamente perceptible en que se presenta un proceso obscuro, todavía ambiguo y contradictorio que ha sido difícil

de desentrañar hasta el momento. La política no se empobrece, se enriquece cambiando de función y de contenido en la medida que responde a la existencia de un nuevo tipo de correlación de fuerzas en la sociedad argentina y a la necesidad de prevenir y neutralizar la enorme cantidad de conflictos potenciales que está generando, como veremos, la consolidación del tipo de democracia excluyente que hoy impera en el país.

En efecto, a la luz de la impresionante sucesión de acontecimientos acaecidos durante los dos últimos años, no es arriesgado afirmar que la decadencia de la política pública, como parte de la decadencia general de la sociedad, se define por cuatro rasgos: el pragmatismo, la inmediatez, la eliminación de las propuestas y del debate político y la frivolidad del trabajo político electoral. Estos rasgos no forman parte, sin embargo, de una nueva estrategia de vaciamiento, sino de ocultamiento de los renovados contenidos actuales de la política. Ocultamiento que toma la forma, o es presentado, como pérdida, es decir como desvanecimiento, cuando en realidad es todo lo contrario. Si se analiza el trabajo político realizado por el muy reducido sector privilegiado de esta sociedad, agrupado alrededor de la nueva clase dominante, aparece un nuevo entramado de relaciones, anteriormente desconocido, entre nuevos protagonistas centrales de la política (fundaciones, consultoras, calificadoras financieras, organismos de control internacional, etc.) y viejas instituciones tradicionales, especialmente modificadas para el desempeño de los nuevos roles que requiere la oportunidad (sindicatos, corporaciones, partidos políticos, etc.). Todas ellas coordinadas, o por lo menos fuertemente supervisadas, por nuevos y viejos organismos internacionales (FMI, Banco Mundial, Grupo de los Siete, etc.) preocupados por asegurar la capacidad de pago y la solvencia a corto plazo de los países fuertemente endeudados. Creciendo unos, autotransformándose, otros y adaptándose, la mayoría, a la necesidad de cambiar la política junto con el cambio de la sociedad, del Estado y del contexto internacional, crearon un centro hegemónico de poder que, por de los muy importantes cambios producidos en el imaginario de la sociedad, resulta, hasta ahora, inexpugnable, a pesar del estado de decadencia y crisis en que ha sumido a la mayoría del país.

Su fortaleza se deriva, valga la aparente paradoja,

de su imagen de debilidad, de su crisis pública y de su incapacidad para generar alternativas viables a la interminable sucesión de políticas de reducción de bienes y conquistas populares que constituyen la esencia de las estrategias gubernamentales neoliberales. Como es sabido, esa estrategia del “ajuste” interminable ha generado un estado de descomposición y decadencia social, que afecta a la inmensa mayoría de la población y, por esa causa, debería entrar en natural contradicción con el contenido de las ofertas que deben atraer la voluntad de las mayorías electorales. Se presenta como debilidad e impotencia y se oculta detrás de las supuestas crisis de la política y del sistema político porque no halla un mejor modo de resolver favorablemente esa contradicción.

Vista desde esa perspectiva, la crisis de representación es un hecho real e indiscutible, pero esa crisis no conduce necesariamente hacia la crisis de la política ni del sistema político. Por el contrario, la crisis de representación se constituye en un punto de partida y en un componente central de las nuevas formas de hacer política de contenido antipopular, en medio de un sistema democrático que se funda en el respeto de la voluntad popular expresada en periódicas consultas electorales. Se relaciona, entonces, con la drástica ruptura que han hecho los dos grandes partidos tradicionales con su propio pasado, en el cual representaban dos fuertes subculturas defensoras del progreso y del bienestar popular y con la disolución de los grandes liderazgos carismáticos que le permitieron ocupar el centro de la escena política durante la mayor parte del siglo anterior.

### 3. LA CORPORATIVIZACIÓN Y LAS CRISIS DE LEGITIMIDAD DEL SISTEMA POLÍTICO

En la investigación anterior, ya citada, sobre las formas en que fue realizada la campaña política de la última contienda electoral, logramos identificar algunos de los rasgos empíricos del modo en que se ha “construido” esa crisis, y de la función que ella cumple en la armonización del funcionamiento político institucional que caracteriza a nuestra democracia actual. Agrupamos esos fenómenos alrededor de dos grandes procesos fundamentales: la corporativización del sistema político y la desafeción política de la mayoría de la sociedad. Aunque los tratamos como partes mutuamente implicadas

de un mismo conjunto, las relaciones que establecimos entre ellos nos llevaron a la conclusión de que nos hallábamos frente a un nuevo tipo de democracia que denominamos “democracia cómplice”, para resaltar aquello que constituía, a nuestro juicio, su característica central: justificar, a través de instrumentos y procedimientos simbólicos, el proceso de decadencia social que acompañaba su consolidación durante el denominado período de transición. Posteriormente, comprobamos que la “justificación simbólica” era muy importante pero constituía sólo un fragmento menor de ese otro crucial proceso de “despojo simbólico” que hemos descrito en el capítulo anterior.

Veamos, primero, algunas de las características del proceso de “corporativización” de las prácticas y de los actores de la política democrática. Transformados en protagonistas dominantes, casi exclusivos de procesos electorales de base massmediática, en los que la sociedad se aviene a seleccionar candidatos sin exigir ni ejercitar la discusión y el desarrollo de proyectos políticos diferentes, los principales protagonistas de esta nueva situación comienzan a desarrollar un nuevo sistema de reglas políticas destinado, primordialmente, a la preservación de los mecanismos ya establecidos de la competencia electoral y al desarrollo de nuevos criterios implícitos de convivencia institucional que van adquiriendo mayor valor por sí mismas que por el modo en que facilitan el cumplimiento de la función social que tienen asignadas. Así, comienzan a generar un conjunto de intereses específicos de la profesión electoral institucional que se vuelve mucho más fuerte y determinante que los intereses que deberían ligar a cada uno de ellos con sus respectivos representados, dando lugar a un previsible proceso de autonomización de necesidades y objetivos que alimenta, a su vez, la formación de un nuevo tipo de espíritu corporativo. El espíritu corporativo produce, por tanto, una insalvable contradicción: aquéllos que fueron elegidos para pensar y actuar en la representación de intereses diversos de la sociedad, y encontrar en las instituciones gubernamentales su modo de enfrentamiento y conciliación, se transforman en todo lo contrario. Constituyen un cuerpo faccioso y autorreferente que subordina toda forma de representación de intereses diversificados de la sociedad, a la necesidad compartida por la mayoría de sus miembros de asegurar la supervivencia y reproducción

“del cuerpo” político-electoral-institucional.

Si se aproxima un poco la mirada puede descubrirse, además, que durante su desarrollo el proceso de corporativización del elenco político fue creando una amplia red de relaciones diversas y entrecruzadas que ha dado lugar a la creación de una especie de megacorporación, compuesta por varias instancias.

La instancia estrictamente política es la más visible porque en ella se reúnen los elencos, las conductas y los procedimientos que permiten la reproducción de la “corporación político-partidaria”, en esa nueva situación de virtual extinción de los pactos representativos. La ruptura del pacto se produce en el mismo momento en que se acentúa el control monopólico de su aparato partidario sobre los procedimientos electorales y hacen posibles esos falsos compromisos de representación, utilizados como vías de acceso casi exclusivo hacia el poder gubernamental. Para amortiguar esa contradicción, los partidos se vuelven fantasmales, se desvinculan de la gente, no recogen ni politizan las demandas, evitan los controles sobre su gestión y abandonan toda forma de orientación ideológica y de dirección política sobre sus elencos de representantes y funcionarios. La autoneutralización del Partido Radical, gestionada cotidianamente por su presidente, el Dr. Alfonsín, para “no entorpecer” una gestión gubernamental que va contra todos sus postulados y promesas electorales, es tan ostentosa y permanente que de ser, como se suponía al principio, una disposición táctica para congelar un problema irresuelto entre Partido y Gobierno, ha pasado a formar parte de un proceso de “vaciamiento” político ideológico, similar al que sufrió el Justicialismo una década atrás y del cual no ha podido, por otra parte, recuperarse nunca más. Por esa razón, las conductas de moral dudosa y los “manejos” espurios que siempre formaron parte de la dinámica global de los partidos políticos se quedan sin contrapeso, se vuelven ahora totalmente dominantes y adquieren dimensiones totalmente desproporcionadas. Surge, de ese modo, un nuevo perfil del partido político caracterizado, entre otros rasgos, por el aislamiento social, las conductas autopreservativas, la eliminación de las ideas y del debate político, la fulminante expansión de las concepciones “posibilistas”, el desplazamiento de la ética política, la imposición de la ingeniería electoral, la organización

masmediática, la manipulación de las instituciones, las formas perversas de vinculación con la clientela electoral en las luchas internas, el internismo y las formas degradadas y vacías de reclutamiento y promoción de los nuevos tipos de militantes.

Puede incluir elementos aún más perversos, como la corrupción individual, colectiva, etc., pero no los requiere inevitablemente: la corporación partidaria puede mantener un correcto código ético pero no por ello genera esa diferencia de intereses que niega su origen y desnaturaliza su función social. El actual presidente del Partido Radical, que es por la generación a que pertenece y por su actuación protagónica en los últimos cuarenta años, un testigo privilegiado de este proceso de mutación de los partidos políticos, lo dice explícitamente: “Esta puja entre política y mercado es fuerte. Para ganarla, se necesita de la convicción que dan los ideales y los partidos han perdido esos ideales, han perdido todo. Las marejadas ultraliberales han producido un efecto catastrófico dentro de las fuerzas políticas, mercantilizándolas. Para nosotros, es especialmente desastroso porque el radicalismo nació luchando contra las oligarquías económicas y hoy ha conformado una oligarquía política: los que se acercan a la política ya lo hacen pensando en la rentabilidad... no existe el fervor militante. No hay una pegatina que no se tenga que pagar, no hay una pintada que no se tenga que pagar. No hay mística, ni militancia” (Alfonsín, 2001).

Asociada con todo esto, se puede identificar, también, una instancia político institucional, relacionada con la gestión de las medidas tomadas en el gobierno y el Estado. Ha sido constituida por una densa trama secreta, o semisecreta, de acuerdos entre funcionarios, jueces, legisladores, gobernantes, políticos, etc., destinados a tomar cierto tipo de iniciativas legislativas; a frenar otras, cuando lesionan intereses defendidos por lobbistas profesionales; a aprobar iniciativas “impopulares” del Poder Ejecutivo o a promocionar toda clase de decisiones gubernamentales. Un sistema de acuerdos espurios que comenzó a ventilarse públicamente el día en que uno de sus más conspicuos representantes decidió denunciar la existencia de sobornos a un grupo de legisladores, para obtener la aprobación de una onerosa modificación a la ley de trabajo vigente, en el Senado de la Nación. Un estudio detallado de esos acontecimientos confirmaría, con datos

específicos, la existencia de este suprasistema que recorre horizontalmente a todos los cuerpos partidarios y gubernamentales (Granovsky, 2001).

Podría mostrar, también, cómo, a través de su evolución, la población percibe, por un lado, su existencia, y descrece, por el otro, de que su poder y sus manejos arbitrarios puedan ser efectivamente modificados. La evidencia de la corrupción genera impotencia, su transformación en un intrigante espectáculo mediático crea indiferencia y desafección. Esos mismos datos dejarían entrever, igualmente, las características y la enorme envergadura del poder político y social que ha ido acumulando la corporación y la forma en que lo ha usado para volverse prácticamente impenetrable a las críticas que le llegaron desde todos los sectores y, especialmente, para seguir manteniendo en secreto los pactos que dieron lugar a los “arreglos” que hicieron posible la aprobación de esa ley, requerida por el Poder Ejecutivo. Mostraría, también, la rapidez de reflejos que tiene el cuerpo para cerrarse sobre sí mismo y generar pactos de silencio entre la mayoría de sus miembros; sobre sus procedimientos secretos, destinados a perpetuar su impunidad o, en el peor de los casos, dilatar y tergiversar enjuiciamientos y eludir sanciones políticas a quienes han tenido comportamientos fuertemente asociados con el delito y la corrupción. Dejaría entrever, en suma, que la complejísima red de complicidades que lo sostiene ha generado una especie de malla de seguridad que le permite sobrevivir cómodamente, sustrayendo del debate político sustantivo su propio cuestionamiento.

Las redes anteriores parecen hallar su último sustento, justificación y explicación en la aparición del nuevo conglomerado político, institucional y empresarial que da forma a la tercera instancia y define, a su vez, la naturaleza de un nuevo tipo de Estado. La degradación de los procedimientos políticos y gubernamentales no sólo se relaciona con la construcción de una nueva forma de poder político institucional, también se han convertido en pieza fundamental de una nueva forma de colusión entre la gestión de los negocios privados y la administración de los intereses públicos, todo lo cual ha dado lugar a la constitución de un nuevo tipo de clase dominante y a la recreación de un nuevo bloque de poder político estatal. Dentro de este bloque, es muy dificultoso escindir, como se hacía

en el pasado, entre el núcleo compuesto por la comunidad propiamente empresaria, dedicada a acumular excedentes sociales a través de sus negocios privados y, aquél otro que, desde la administración de instituciones estratégicas del Estado, lo promueve y facilita, legal e ilegalmente. Aunque sabemos que la nueva clase dominante es dirigida por un núcleo sumamente poderoso, enclavado en los negocios financieros, resulta muy difícil dilucidar en qué circunstancias el descomunal crecimiento de las ganancias obtenidas durante la última década por los grandes bancos y las grandes empresas privatizadas ha sido generado por la realización de negocios más o menos normales en el mercado o es el producto de una serie de “arreglos” establecidos entre ellos y la corporación político gubernamental.

En esos “arreglos”, parece existir un constante juego de ida y vuelta, donde se entremezclan funcionarios, iniciativas, estrategias, intereses y hasta las propias instituciones públicas y privadas. Todos parecen obtener sus objetivos, el crecimiento de los negocios, la acumulación súbita de capital, el enriquecimiento injustificable, etc., por medio del manejo ilícito de los poderes estatales. Pero, aunque están convergiendo en la formación de un mismo bloque, tienen distinto origen, se manejan con diferentes procedimientos y ejercen distinta función: unos, provienen del campo empresario y son especialistas en la acumulación de capital propiamente dicho y, otros, provienen del campo político y son especialistas en la acumulación de capital político electoral. Entre ambos, han constituido una especie de gigantesca asociación ilícita que controla y administra un nuevo tipo de Estado, plagado de instituciones que tienen como misión fundamental favorecer el desarrollo de ganancias privadas de carácter extraordinario o casi monopólicas (Notchef, 2001). Ganancias que por su propia naturaleza van en oposición a los intereses generales de la sociedad pero que, a la vez, necesitan ser legitimizadas por ella misma a través del consenso, por lo menos pasivo, que le otorga su participación en periódicos procesos electorales, organizados por los grandes partidos tradicionales. Cada cual pone lo suyo y, en función de ello, se define el reparto de los réditos obtenidos. Las evidencias aportadas por las últimas investigaciones muestran un estado de colusión tan complejo que vuelve casi imposible e inútil el intento de dife-

renciación. Son beneficios económicos, políticos y sociales que se apropia un sector muy reducido de la sociedad por medio de un nuevo tipo de ejercicio entremezclado de las formas de poder, de un nuevo modo de subordinar la función del Estado a sus estrategias de acumulación.

De más está indicar que de allí se extrae la substancia que alimenta la serie también interminable de mecanismos individuales y colectivos de corrupción ocasional, periódica o sistemática. Todas las formas y todos los niveles de corrupción política, empresarial y estatal están en ese bloque presentes, pero no es la corrupción sino la “colusión” lo que define tanto al bloque social dominante y a la forma del Estado, como al carácter “neoprebendario” que adquiere el modelo de acumulación de capital. Este Estado es, además, el artífice, el conductor, el principal protagonista del proceso de redistribución regresiva del ingreso, de empobrecimiento y de exclusión social, que caracterizamos anteriormente, a través de un perverso mecanismo, su autodestrucción. El sistema político en que se apoya y le aporta las cuotas mínimas imprescindibles de legitimidad es, a su vez, el responsable principal del vaciamiento ideológico, del “despojo” en el nivel simbólico, o sea, de la producción política que intenta profundizar y expandir el proceso de “desafección” de los sectores populares, hasta sumirlo, a través de la sensación de impotencia, en un estado casi permanente de inanición, en espectador pasivo y desvaído, incapaz de reaccionar

En efecto, la contracara del proceso de corporativización es la desafección, un fenómeno desarrollado en nuestro trabajo ya citado, tomando como base las ideas expuestas hace un tiempo por algunos analistas del proceso de transición democrática (Paramio, 1993) pero que continúa escazamente analizado todavía. Hace referencia a un proceso que se desarrolla en forma fragmentaria y ambigua y afecta las conductas, actitudes y valoraciones de los ciudadanos comunes respecto al valor y la eficacia de la política, concebida como práctica de transformación de lo social. Se desarrolla en tres etapas: la desafiliación, el desinterés y la desafección propiamente dicha. La desafiliación parece ser uno de los primeros signos distintivos de las nuevas democracias, supone la disolución de los lazos de fidelidad política tradicional de una parte de la sociedad con un tipo determinado de agrupación

político electoral; el antiguo “partidario” rompe las relaciones de pertenencia y elabora una nueva relación de referencia que significa mayor independencia y el desarrollo de un espíritu crítico para evaluar su desempeño específico en cada circunstancia particular. Cuando la independencia y la aplicación de juicio crítico producen reiteradas evaluaciones negativas, puede producir un desplazamiento de la preferencia electoral hacia otras agrupaciones, pero ese desplazamiento no va acompañado de nuevas reafiliaciones sino de una creciente convicción de que el fracaso político del partido de referencia es parte del fracaso de todo el sistema. En ese caso, se produce una especie de cambio de grado: la desafiliación se transforma en desinterés, en el momento en que el ciudadano comienza a considerar la oferta electoral como irrelevante, como una especie de juego de simulación que, en unos casos, omite dar respuesta, en otros, tergiversa los términos y, en el resto, oculta deliberadamente los problemas que le interesan a la gente.

Lo que une ambos movimientos, la corporativización del elenco político y la tendencia a la desafección de la mayoría de los ciudadanos, es otro proceso igualmente significativo: la compleja producción de nuevos significados, generados en su transcurso por la actuación política mediante la elaboración de un nuevo tipo de discurso consagratorio y la eliminación de todo tipo de discurso anticipatorio; fenómeno que rompe con las experiencias del pasado y abre el campo a las nuevas actividades del antiguo dirigente-representante convertido, ahora en operador-corporativo. En efecto, aunque se presentan y son vistos como parte de un frívolo elenco especializado en hacer atractivo el reiterado espectáculo electoral vacío de contenido político de esta democracia, los candidatos, los representantes y los gobernantes, convenientemente asistidos por un verdadero ejército de técnicos, asesores y especialistas extraídos del sector empresario, ha demostrado poseer una enorme capacidad para remodelar la subjetividad de un enorme sector multclasista de la sociedad y generar una compleja ideología de aceptación resignada de la decadencia y el despojo que ha generado, a su vez, un consenso pasivo pero consistente respecto de la consolidación de la democracia desigualitaria y excluyente. Este complejo operativo cotidiano se apoya en una compleja articulación de actores, acciones, representaciones y discursos guiados por

una casi exclusiva lógica de convencimiento y subordinación: un tipo de chantaje político-cultural, de fuertes consecuencias psicológicas, que no sólo se halla dirigida a la aceptación del despojo sino que se convierte en un despojo en sí mismo.

Visto con esa perspectiva, el sistema político no parece estar en crisis porque haya perdido una naturaleza que podría llegar a recuperar, sino porque ha sufrido una profunda mutación en la cual la producción escenificada y permanente de su crisis se enarbola como un elemento fundamental de su reproducción y del cumplimiento de una de sus funciones fundamentales, la generación de “desafección”. En vez de convertirse en el núcleo disparador de la restauración de los derechos sociales severamente conculcados durante la dictadura militar, los nuevos representantes del poder popular democrático, más allá de sus intenciones, operaron en sentido contrario, diseñando un nuevo tipo de régimen político-democrático fuertemente asociado a la implantación, consolidación y reproducción del proyecto neoliberal que articuló en un solo proceso de declinación económica, endeudamiento externo, decadencia social, y despojo material con crisis, subordinación y despojo de la política en el marco institucional de la democracia. Por hallarnos inmersos en ese proceso desde hace mucho tiempo, es posible que la profundización actual de la crisis económica y política se haya transformado también en una crisis ideológico-cultural: lo que comenzó con desafiliación de los partidos y continuó después como desinterés respecto a la políticas “inoperantes”, surgidas desde dentro del sistema político, se está transformando en algo mucho más riesgoso, de imprevisibles consecuencias: la desafección respecto a “lo político”, es decir, a la política misma entendida como instrumento de modificación de la realidad social.

Los medios utilizados para generar esa crisis y esa sensación de extinción de la política no son, por tanto, una anomalía, no sorprenden por haber sido la consecuencia no buscada de un funcionamiento interinstitucional naturalmente imperfecto que ahora toma rasgos perversos e irracionales por efecto de la agudización de la decadencia. Es otra cosa, es una nueva modalidad creada por la corporación en todos sus niveles para generar un nuevo tipo de consenso. Un consenso “neutralizante” que no brinda adhesión por acuerdo explícito o implícito

con la realidad y los discursos existentes sino por resignación, por hastío, por aceptación de que en la larga batalla por la preeminencia social, sostenida durante largas décadas, los sectores populares empujados hacia el empobrecimiento y la marginación ya no tienen capacidad alguna para enfrentar con posibilidades de éxito a los poderes constituidos en todos los niveles de la vida social. A la exitosa prédica sobre el crecimiento incontenible de los recursos y el poder controlado por los poderosos en el nuevo contexto de la globalización se suma también el “chantaje” empresarial-gubernamental, una muy exitosa herramienta de apelación y de extorsión, que analizaremos más adelante, y que ha brindado muy buenos resultados cuando hubo que explicar las inevitables causas “externas” de la expropiación y el despojo.

De donde podemos afirmar que la política no está vacía ni está en crisis, ha sufrido una mutación, ha cambiado de función y contenido: en lugar de potenciar y proyectar la lucha social, jerarquizándola, busca inhibirla produciendo impotencia, resignación, desaliento y la nueva creencia de que la democracia sólo sirve para seleccionar elencos administrativos que no tienen la obligación de respetar pacto representativo alguno. Gobernantes que utilizan su escasa iniciativa política para mantener calmos a los inversores financieros, para satisfacer la exigencias de sus instituciones representativas y para asegurar la consecución de un orden donde la lógica de los mercados marca la relaciones de fuerza que han hecho posible, de un lado, el despojo de la mayoría y, del otro, la inconcebible concentración de la propiedad, el capital, los ingresos y el poder en un sector cada vez más minoritario y retrógrado de la sociedad.

#### 4. LA ELIMINACIÓN DEL DEBATE PÚBLICO Y LA ELABORACIÓN PRIVADA Y SEMISECRETA DE LA POLÍTICA

Todo lo anterior se basa, como hemos dicho, en una radical transformación de las estrategias de los partidos políticos en la disputa electoral y de los elencos gubernamentales en la instancia político institucional. Lo que conocemos como frivolidad del trabajo político es parte de un nuevo proceso que tiene dos grandes componentes: de un lado, es tributario de la privatización del trabajo político y, del otro, el resultado de una nueva estrategia

de ocultamiento del contenido de la política que toma la forma, o que es presentado, como pérdida, es decir, como vaciamiento. En efecto, la política no dejó de ocupar ni por un instante su tradicional rol estratégico en la fijación de metas y contenidos. Pero esa política creadora, aunque retrógrada, se convirtió en práctica de un sólo sector de la sociedad, se elaboró en secreto y fue, además, privatizada. Como constituye el fundamento de la expropiación y el despojo es, también, inconfesable.

Ello explica en última instancia, la exacerbación del vaciamiento ideológico y de la representación mediática que caracterizó a la última campaña electoral. Dentro de ese contexto, totalmente despolitizado ¿qué proyecto propuso La Alianza? Y, en función de ello ¿qué significado puede atribuírsele al voto de la mayoría que le permitió obtener un triunfo tan significativo? Como se ha afirmado reiteradamente, la votación adversa al peronismo, que terminó con una década de hegemonía del proyecto menemista, traía un doble mensaje: recuperación de la ética política, mediante la reforma moral de la gestión gubernamental y freno al proceso de estancamiento económico-decadencia social que, aunque parecía haberse vuelto endémico pero manejable, estaba agravándose peligrosamente por los efectos directos e indirectos que generaba el mantenimiento de la convertibilidad monetaria en el nuevo contexto regional, dominado por los efectos de la última devaluación brasileña. A pesar de expresar una difusa aspiración al cambio, la propuesta no parecía compleja ni irrealizable: modificar la tendencia al estancamiento y frenar el proceso de expropiación pero sin cambiar ninguno de los grandes pilares del modelo existente (Terragno, 2000; Casullo, 2000; Bonasso, 2000).

Por las presiones ejercidas desde el establecimiento financiero nacional e internacional, esas iniciales y débiles convicciones se transformaron, súbita e inesperadamente, en todo lo contrario, en una agresiva ofensiva antipopular destinada a extraer recursos de esos sectores para arrojar un poco de agua en el desierto, es decir, para reducir en parte el importante déficit fiscal heredado del gobierno anterior. Pero, como ya ha sido suficientemente demostrado, el déficit no era un problema de coyuntura ni la consecuencia principal de administraciones dispendiosas, expresaba una vez más las consecuencias generadas por un conjunto de

problemas estructurales de la economía que al no haber sido resueltos en el marco de las políticas de desregulación, privatización y reducción del Estado llevadas a cabo durante el período presidencial anterior, se habían agravado muy sensiblemente. En ese nuevo contexto, el modelo neoliberal heredado estaba siendo aceptado por la mayoría de los políticos de la Alianza gobernante porque, a pesar de ser injusto socialmente, se había mostrado razonablemente exitoso en el plano económico. Poco tiempo después, la agudización del estancamiento económico, combinado con el agravamiento de la cuestión social, ponía en evidencia que había llegado a su agotamiento, se convertía en un modelo aún más injusto pero, además, inviable. “La estrategia, adoptada por la Argentina entre la hiperinflación de Alfonsín y la convertibilidad de Menem ha hecho implosión”, afirmaba, en ese momento, un periodista especializado (Nudler, 2000).

En claro contraste con lo que había venido ocurriendo durante la década del noventa, en situaciones “de ajuste” similares, el paquete de nuevas medidas expropiadoras con que se presentó en sociedad el gobierno de la Alianza produjo un efecto sensiblemente diferente. En ese nuevo contexto, la profundización de las políticas neoliberales del Ministro Machinea y, especialmente, la elevación de impuestos y la reducción forzada de salarios estatales, no sólo generaron frustración y desconcierto entre quienes la votaron con esperanza de que produjera un cambio, sino que marcaron el comienzo y la rápida generalización de una nueva sensación: el país estaba apresado en un círculo vicioso irresoluble, agravado, ahora, por la inesperada insistencia del nuevo gobierno en continuar aplicando viejas fórmulas de ajuste que ya parecían definitivamente agotadas. Una aparentemente inexplicable inconsistencia de la política pública que aparecía nuevamente condicionada por políticas gestadas y pactadas, en secreto, con los organismos internacionales, ante la necesidad de afrontar, también en secreto, el cúmulo de nuevos problemas agregados por la aceleración del proceso de declinación económica, decadencia social y descomposición institucional. En efecto, tal como lo venían señalando en forma aislada algunos analistas económicos, aunque negado sistemáticamente por la clase política, la recuperación de la actividad económica, semiparalizada por la prolongada crisis que, estando latente, desató la devaluación de la moneda brasileña, se

había vuelto definitivamente incompatible con el mantenimiento de la convertibilidad monetaria, con la magnitud actual del endeudamiento, con el indetenible deterioro del mercado interno y con el incesante agravamiento de la nueva “cuestión social de la Argentina”, asociada al crecimiento de la delincuencia y a la amenaza latente de estallido social .

Como muestra de la máxima impotencia en que lo sumerge la adopción de esa estrategia, a medida que los cuatro grandes problemas se van volviendo inconmensurables e inmanejables, el Gobierno se refugia en la realización de una serie de operaciones de ingeniería financiera, destinadas solamente a impedir el agravamiento de la situación heredada. Mientras tanto, apuesta a que el mero transcurso del tiempo vaya generando un “milagro del mercado”, una especie de reactivación económica que aún en el caso de producirse sería tan endeble y circunstancial como la precaria sensación de alivio asociada a ella. En ese contexto, los discursos elusivos, las referencias fragmentarias, la imposición de temas no trascendentes y aún el propio ocultamiento pasaron a formar parte de una vasta conspiración de silencio respecto de las causas profundas y de los efectos ya permanentes de la perversa retroalimentación que, desde hace un largo tiempo, se ha venido estableciendo con el déficit de la balanza de pagos externa, la política monetaria, el achicamiento del mercado interno, el estancamiento económico y el crecimiento exponencial del endeudamiento externo. (Seoane et al., 2001; Bermúdez, 2001).

La engañosa unanimidad respecto al mantenimiento de la convertibilidad que recorrió la campaña presidencial comenzó a mostrar sus núcleos hondamente conflictivos cuando el Ministro Machinea le dio status político, al denunciar el acoso que esa firme estrategia gubernamental sufría desde dos flancos opuestos: la propuesta de devaluación y su contraria, la propuesta de dolarización. En realidad, el problema de la política monetaria comenzaba a ingresar en la escena pública porque estaba expresando el nuevo tipo de enfrentamiento que se daba entre fracciones diferentes del gran capital. Pero también aquí comenzó a imperar la lógica de la privatización-secretización de la política, pues el importante conflicto social en desarrollo alrededor de los distintos intereses empresariales, que se

enhebran con el cambio de la política monetaria y sus consecuencias, no alcanza a ocupar, ni siquiera por un instante, el centro del debate político ni el cruzamiento visible de las razones y consecuencias de las estrategias que estaban en juego (Verbitzky, 2001). El problema era y sigue siendo crucial, pero la cerrada negativa de la clase política a hacerse cargo de la cuestión, deja como única alternativa el actual discurso semivacío y elusivo del Ministro Cavallo, así como también su superficial e ineficaz política de aumento de la competitividad dirigida a algunos sectores productivos, mediante la disminución de impuestos combinada con rebaja de costos salariales. En lugar del diagnóstico, la reflexión y el enfrentamiento de visiones y propuestas se lanza, esporádicamente, el discurso apabullante y catastrofista, justificador de la inanición y la impotencia. “Lo que hay, o el caos”..., “si salimos de la convertibilidad, caemos en cesación de pagos”, dice uno de los asesores principales del nuevo Ministro de Economía (Liendo, 2001).

Lo mismo puede afirmarse de los discursos (o de la ominosa ausencia de análisis, propuestas y discursos) sobre la relación de mutuo condicionamiento que se produce entre mantenimiento de la “convertibilidad” y mayor “endeudamiento” (Calcagno; Calcagno, 2000; Basualdo, 2001), o de los mensajes escandalosos pero superficiales respecto a la naturaleza y las causas del permanente agravamiento de la desocupación, de la pobreza y del conjunto de nuevas lacras que constituyen la nueva “cuestión social” en la Argentina (Verbitzky, 2000; Helgfort, 2000).

Política monetaria, endeudamiento, déficit externo, redistribución regresiva del ingreso asociado a la política fiscal y déficit fiscal son los componentes centrales de una crisis económica que reconoce una causa anterior y fundamental, el déficit de la dotación, de la acumulación y de la inversión de capital y que, retroalimentándose perversamente, explican el atraso, la inestabilidad, la vulnerabilidad, el estancamiento y la declinación de la economía en la actualidad. Sin embargo, ninguna de las múltiples conexiones que explican la naturaleza del estado de estancamiento, declinación y crisis que signan a la economía y a la sociedad han sido incorporadas al discurso público ni a la oferta electoral. Algo similar ocurre con el ocultamiento de problemas menos acuciantes pero igualmente graves, tales

como la aceleración del proceso de desindustrialización, el rol central de las empresas monopólicas de servicios y su relación con el comportamiento de la nueva cúpula empresaria extranjerizada y superconcentrada, la crisis de las economías regionales y su relación con la debilidad del sector exportador, además de aquéllos, menos ocultos, que conforman la acentuación del estado de decadencia social, como el decrecimiento y deterioro del conjunto de los servicios prestados por el Estado (salud, educación, seguridad, previsión social, etc.)

## 5. EL MENSAJE POSIBILISTA

Por su propia naturaleza y por el evidente fracaso en lograr los objetivos propuestos, los proyectos transformadores de la concepción neoliberal hace tiempo que sólo concitan la adhesión de una minoría de la población; no pueden generar consensos mayoritarios ni aportar una base de legitimidad estatal más o menos permanente. Por eso obligan a diseñar una minuciosa división del trabajo en el seno mismo de la corporación: son elaborados en semisecreto dentro de las nuevas usinas privadas de proyectos específicos (consultoras, fundaciones, organismos internacionales, etc.), son presentadas, difundidas y justificadas abiertamente por los nuevos especialistas mediáticos (periodistas especializados, consultores, etc.) y son astutamente escamoteadas a la consideración política a través de una serie de discursos elusivos por los dirigentes de los partidos políticos, especialmente en los períodos electorales

Esta nueva modalidad de “hacer política”, despojándola de todo su real potencial transformador, se basa en la sofisticada construcción y en la insistente reproducción de un mensaje a la sociedad que denominamos “el mensaje de la impotencia” y que constituye, por otra parte, uno de los componentes fundamentales de los procesos que tienden a transformar, como vimos, la “desafiliación” en “desafección”. El mensaje de la impotencia tiene, por tanto, tres objetivos: el objetivo inmediato es organizar exitosamente el espectáculo electoral, frivolisándolo, vaciándolo de contenido. El objetivo específico es la justificación de cada una de la serie de medidas estatales que conducen directamente a, o que permiten, la ejecución de las medidas expropiadoras que alimentan la estrategia del despojo. El objetivo mediato es más trascendente, tiene efectos

más profundos y duraderos: se trata de lograr que adquiera carácter dominante en la representación de nuestra identidad una vieja premisa, definitiva de los mecanismos de construcción de hegemonía: “nos convertimos en aquello que creemos, o que nos hacen creer, que somos”, aún cuando eso que creemos o que nos inducen a creer sea fragmentario, interesadamente deformado o directamente falso y se nos convierta en una imagen de efectos perversos que destruye toda posibilidad de generar sentimientos de identidad y autonomía y de transformar potencialidades ocultas en la capacidad de proyectar y llevar adelante proyectos de cambios sociales e individuales. Se basa, como veremos, en la “naturalización” de un proceso histórico de pérdidas y derrotas de los sectores populares que se ha transformado actualmente en una situación de indefección. Desde esa posición de indefección se traslada toda, absolutamente toda, la capacidad de modelar el destino propio y ajeno a una nueva generación de poderes indefinidos, omnímodos y misteriosos, es decir, inidentificables, que marcan el rumbo de nuestro universo y se expresan a través de sus “intermediarios”, nuestros amigables aunque temibles interlocutores políticos (Scavino, 1999).

Este reconocimiento del no-poder de los sectores populares y de las organizaciones sociales y políticas que pretenden representarlos, tratando de resguardar sus intereses y sus derechos adquiridos, alimenta de un modo cada vez más extendido un nuevo tipo de mensaje y un nuevo modo de definir el alcance y la función de la política en democracia que denominaremos “el posibilismo”; un fenómeno ideológico político que se alimenta de una mezcla de proporciones cambiantes entre “hipocresía”, “cinismo” y “pragmatismo”.

A pesar de sus innumerables variaciones, “el posibilismo” se construye alrededor de tres ejes centrales: la producción de un complejo y multivariado mensaje de inanición e impotencia que denominaremos “imposibilista”, la transformación de esa ideología imposibilista en “sentido común”, es decir, en un criterio que se halla inadvertidamente presente en los procesos de representación y análisis de la realidad social circundante y, por último, en la transformación de la impotencia que genera esa creencia o esa convicción “imposibilista” en la base de un también complejo, multivariado y

opaco proceso de “chantaje” político respecto a los problemas de la gobernabilidad y de la estabilidad del régimen democrático.

La rapidez con que se ha difundido y penetrado esta forma hoy dominante de representación de la realidad en diversos sectores de nuestra sociedad se debe a una múltiple combinación de factores, de entre los cuales tendremos en cuenta aquí sólo algunos, aquellos que forman parte del complejo operativo de alusión-elusión-negación de problemas que es producido en casi todas las instancias institucionales y no institucionales de la sociedad, el sistema político y el Estado y que se alimenta y se “enriquece”, además, por medio de su propia reiteración, haciendo desfilar persistentemente una serie ininterrumpida de símbolos, ideas, nociones, representaciones, estructuras argumentativas, axiomas “naturalizados”, imágenes, procedimientos políticos y criterios valorativos. Las formas en que algunas de estas variantes son construidas o los modos en que las variantes pueden ser combinadas entre sí, nos brindan lo que podríamos denominar las subespecies generadoras de la ideología imposibilista.

A diferencia del neoliberalismo, la ideología imposibilista no es explícitamente justificatoria de la existencia de estructuras de explotación, de dominación o de poder en la sociedad; tampoco considera que la desigualdad social refleja, a su modo, inevitable y positivamente, las diferencias de aptitudes, de capacidades y de actitudes de individuos o de grupos entre sí. Condena, a veces explícitamente, las múltiples situaciones de injusticia que alimentan la expansión de las desigualdades materiales, sociales y culturales. Su razonamiento parece tener siempre presente el problema de la injusta distribución de la riqueza y, en su punto más extremo, puede ensayar, incluso, algún discurso de carácter igualitario. Su particularidad no reside en la definición de objetivos, ni en la enunciación de sus valores, sino en otra cosa, en el diagnóstico que elabora respecto de las nuevas propiedades actuales de las estructuras de dominación y la imposibilidad que tienen actualmente las clases subalternas, y también los Estados nacionales, de modificarlas a causa de las férreas relaciones de poder que han construido y consolidado, operando desde el ámbito del mercado.

El supuesto general de la ideología imposibilista es, precisamente, que las transformaciones tecnológicas, económicas, culturales e institucionales producidas en el mundo durante los últimos veinte años han eliminado, en la práctica, todas las formas de autonomía y libertad que las clases subordinadas habían logrado obtener durante la compleja historia de luchas y enfrentamientos protagonizada a lo largo de todo el siglo anterior. Una pérdida que ha influido sustancialmente en la extinción de cierto tipo de ideología, en la desaparición de la idea de proyecto político, en la radical transformación de sus anteriores portadores, las organizaciones corporativas y los partidos políticos y, sobre todo, en la pérdida de funciones, de autonomía y de poder del Estado.

La ideología imposibilista se define, entonces, por el contenido del diagnóstico que elabora: los poderosos son más ricos, poderosos y autónomos en todo sentido, a la vez que el resto de los mortales tienen atado su destino a los modos en que aquéllos ejercen ese poder y definen los rasgos de las nuevas sociedades. Por lo que hemos visto, ese modo de ejercer el poder desde los diferentes monopolios económicos, sociales y políticos que controlan, los vuelve más pobres, menos necesarios, más heterónomos, con mucho menos capacidad para discutir las condiciones que les imponen los poderosos y sin ninguna capacidad para construir alguna otra forma de poder alternativo. A pesar de sus diferentes variantes, es siempre un discurso conservador, inmovilista, articulado a la reproducción de lo ya existente, receptor pasivo y acrítico de las innumerables restricciones que presenta la realidad actual y justificador de la inanición, derivada del reconocimiento del margen casi nulo que hoy existe para construir cursos de acción alternativos y proyectos que, por ser diferentes, devienen en proyectos imposibles. Es un discurso negativo que no convence, que no se apoya en importantes núcleos racionales ni desarrolla argumentos atrayentes, es un discurso que asusta, que ensombrece, que minimiza, que nos hace sentir mucho menos de lo que fuimos y mucho más de lo que seremos. Es, en definitiva, un discurso de muerte.

Por reunir estas características, se ha convertido en el mensaje preferido de la fracción propiamente política del elenco megacorporativo, responsable de construir una oferta política capaz de atraer al

mayor número de electores. Si tenemos en cuenta que la mayor fuente de legitimidad del Estado corporativizado ha sido, hasta ahora, el consenso y la participación electoral, el discurso posibilista es un discurso de mediación simbólica que genera formas de representación y de reflexión adaptadas, a su vez, al papel de mediación y disimulo respecto de las estrategias generadas en el seno del poder que ejercen partidos, representantes y operadores varios del sistema político. Con el avance de la crisis general, desatada en los dos últimos años, el “imposibilismo” se ha difundido mucho más que en la década pasada, se ha convertido en el único recurso justificatorio de las políticas oficiales y también de las actitudes de acompañamiento cómplice de la oposición. Pero, esa especie de uso indiscriminado de la justificación posibilista, que puede hallarse hasta en la presentación de las más pequeñas decisiones estatales y en el discurso de los funcionarios más insignificantes, ha comenzado a mostrar la naturaleza de las verdaderas intenciones que los alimentan, las grandes falencias de su estrategia argumentativa y el tipo de parálisis institucional que está provocando (O'Donnell, 2000; Terragno, 2000a).

Veamos ahora cuáles son los rasgos más visibles de algunas de sus formas específicas.

1. “El imposibilismo puro”. Trata de paralizar las débiles formas de resistencia social y de enfrentamiento político que han venido generando algunos de los grupos damnificados por la gran ofensiva expropiadora del Estado y del sector empresarial, provocando terror hacia un futuro aún peor que el menguado presente. Se apoya, primero, en la construcción de un diagnóstico del estado de correlación de fuerzas actual absolutamente dominado por la fortaleza e impunidad de los poderes ya constituidos. Continúa demostrando que, al contrario de lo que ocurre con esos poderes, la fragmentación social, la pérdida de identidad, la falta de iniciativa y la insistencia en definir enfrentamientos y utilizar métodos de acción anticuados y obsoletos sólo puede conducir a una derrota de efectos mucho más devastadores que los que ha venido generando la ofensiva expropiadora. Haciendo referencia al célebre enfrentamiento de los escuadrones de la caballería polaca a las divisiones blindadas alemanas, en momentos de la invasión a ese país, durante la segunda guerra mundial, el columnista J. Niel-

sen (2000) plantea, en una magnífica exposición, los problemas que enfrenta esta forma de pensamiento. En un artículo denominado, precisamente, “La caballería polaca”, dice: “Pero ya estamos en el año 2000. (La huelga general), lejos de obligar al gobierno a humanizar el modelo, al golpearlo, lo privan de alguna posibilidad de atenuar el impacto de las transformaciones que están en marcha. Ante cada nuevo indicio de que la Argentina se resiste a entregarse plenamente al orden globalizado que, a pesar de todo está consolidándose, el mercado reacciona bajándole el pulgar, forzando al gobierno de turno a tratar de aplacarlo con medidas aún más feroces”. La conclusión lógica que el lector extrae de su largo razonamiento es siempre la misma: es justo pero imposible; el intento es simpático pero estéril y peligroso; es necesario adecuar la magnitud de la demanda a los medios para obtenerlas; es necesario, pero sumamente riesgoso porque puede provocar represalias de efectos aún peores.

2. El “imposibilismo cínico”. Con esta calificación, hacemos referencia a su intención de ocultar deliberadamente, mediante un discurso sumamente coherente, ciertos datos de la realidad o ciertas intenciones que, de volverse evidentes, pueden perjudicar los intereses inmediatos o el desarrollo de estrategias de acción a los que ese razonamiento se refiere. Es construido a partir de una falsificación, una omisión o una mentira evidente. Una de las más breves y elocuentes ilustraciones de esta modalidad de introducir impunemente, en medio de un razonamiento, la mentira más cruda y evidente, lo brinda la siguiente justificación del Presidente De la Rúa. En el escueto discurso donde anuncia la disminución del 15% de los salarios de los empleados estatales, implementado para lograr un equilibrio absoluto de las cuentas fiscales, plantea la cuestión del siguiente modo: este recorte de salarios no es un “ajuste”, es decir, una disminución de los ingresos de los sectores sociales directa e indirectamente afectados por la medida, un “ajuste” sería la consecuencia de una devaluación de la moneda porque en ese caso se “metería la mano en el bolsillo de la gente”. Como se ve, nos hallamos frente a una falacia: la devaluación es expropiatoria porque sustrae ingresos a través de la inflación y la modificación de los precios relativos en el mercado, pero la reducción directa y unilateral de salarios a los empleados públicos no es confiscatoria porque, suponemos que supone el Presidente,

no se obtiene a través de los mismos mecanismos que desata la devaluación inflacionaria (De la Rúa, 2001).

Para no reiterar el contenido negativo y “aterrador” de las otras modalidades del imposibilismo, la influyente tecnocracia política, íntimamente ligada a los organismos internacionales y comprometida con la gestión gubernamental, ha comenzado a elaborar este tipo de razonamiento que pretende ser realista, positivo y progresista pero que se transforma, por su método de construcción, en un discurso mistificador e increíblemente cínico. Puede ser considerado, también, como una nueva especie de ideología justificatoria de cierto sector progresista-periférico que anida en los partidos tradicionales. La derecha, en cambio, no necesita ser cínica, se apoya en los postulados de la sociedad de mercado para proponer medidas aún más radicales.

Da por sentado que la grave situación de decadencia social que viven los países periféricos en general y la Argentina en particular es un hecho irreversible que no puede ser modificado sino asumido como un dato incontrastable de esta nueva realidad. La función de la política será, entonces, eliminar las conquistas sociales existentes y transformar o eliminar las instituciones ligadas a ellas para dar lugar a la aplicación de un nuevo tipo de justicia distributiva. Es un nuevo criterio de reducción de los gastos o de despojo de antiguos derechos adquiridos, justificada por la necesidad de redistribuir lo existente entre esos derechohabientes y un gran sector social que ya ha sido expropiado y, por esa causa, ha quedado totalmente excluido de esos “beneficios”. Es un intento de hacer pasar la reducción de ese gasto estatal, o la virtual liquidación de alguna de esas instituciones, por la necesidad de introducir reformas que generen la incorporación de esos sectores ya excluidos dentro de un nuevo esquema que, de concretarse, genera un anteriormente desconocido mecanismo de nivelación hacia abajo, de movilidad ocupacional y social descendente. Un planteo que omite considerar a esos excluidos como víctimas de un muy injusto proceso de despojo que la política debe reparar, tratando de reintroducir por diversos medios a los excluidos dentro del sistema que ellos están administrando. Esa omisión transforma a la decadencia en un hecho “natural” y a la exclusión en un hecho irreversible. Puede ser verificado analizando, entre otros, el discurso del Ministro A.

Flamarique destinado justificar la introducción de reformas a la ley laboral existente. En esa ocasión, el proyecto de “flexibilización” habíase convertido en una condición ineludible del FMI para negociar nuevos préstamos, condición que fue negada y encubierta con el argumento de que tal “flexibilización” deterioraba las condiciones de contratación existentes pero iba a generar, como contrapartida, un importante aumento de la demanda de trabajo y una reducción de la desocupación. Con la misma lógica, razona P. Gerchunoff, jefe de asesores del Ministerio de Economía, para justificar una nueva reducción de los aportes estatales al régimen de previsión social. También Caputo, Secretario de Ciencia y Técnica, para justificar la eliminación de la “carrera de investigador” en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y Colombo, Jefe del Gabinete de Ministros, para explicar la necesidad de provocar un ahorro de gastos mediante la reforma-achicamiento-modernización de la estructura del Estado. Puede verse el análisis crítico de este tipo de argumentación en un artículo publicado por un Diputado Nacional de la Alianza gobernante (González, 2000).

3. “El imposibilismo hipócrita”. A diferencia de la anterior, esta forma de imposibilismo no se basa en un razonamiento sino en un mensaje más complejo, compuesto precisamente por la contradicción flagrante que el receptor percibe entre el contenido de ciertos discursos específicos y la conducta institucional de representantes, dirigentes y partidos. Funciona del siguiente modo: se construye una visión, un diagnóstico o una propuesta de transformación de alguna de la innumerable cantidad de situaciones específicas y de iniciativas gubernamentales que nos han llevado al estado actual de decadencia y, luego, se la niega en los hechos tomando decisiones políticas que favorecen la aprobación de las situaciones e iniciativas criticadas y obstaculizan el desarrollo de proyectos contrarios o alternativos. En el momento de explicar tales incongruencias, se apela siempre al mismo recurso: la inesperada aparición de factores externos amenazantes e incontrolables que obligan a ceder para evitar males mayores, dejando de lado los objetivos originales para una nueva oportunidad en la que el contexto general o la correlación de fuerzas políticas resulte más favorable. El denominado “pacto de Olivos” entre el ex presidente Raúl Alfonsín y el entonces presidente Carlos Menem, que destrabó los

procedimientos institucionales que permitieron la reelección posterior de este último, constituye un ejemplo paradigmático, pero no el único.

Otra variante del mismo procedimiento puede hallarse en la naturaleza casi permanente del doble discurso de los más altos dirigentes del Frepaso, después de haberse integrado el gobierno de la Alianza. Una fuerte evidencia la aporta, por ejemplo, el testimonio de G. O'Donnell, asesor del Vicepresidente Carlos Álvarez en cuestiones de reforma del Estado, respecto del papel que han jugado algunos de ellos en la elaboración y gestión de un proyecto de reforma de las leyes electorales, destinado a erradicar procedimientos que estaban quitando transparencia a esa instancia político institucional. Allí se comprueba que en el mismo momento que Carlos Álvarez trataba de esclarecer los sobornos en el Senado de la Nación, como una forma de iniciar una lucha de largo aliento con la vieja práctica política corporativa que terminó con su renuncia a la Vicepresidencia de la Nación, avalaba la mutilación de las reformas introducidas en la nueva ley electoral para no generar enfrentamientos con las "maquinarias partidarias" (O'Donnell, 2001).

Ante el evidente fracaso de la estrategia socioeconómica del conservadurismo neoliberal, han aparecido otros ejemplares de la misma especie; sólo mencionaremos algunos de ellos. El más importante por sus efectos paralizantes es el que denominamos "imposibilismo apocalíptico", basado en una grosera estrategia discursiva que no trata de convencer con argumentos racionales sino inhibir con pronósticos aterradores. Puede resumirse en breves términos: o seguimos profundizando las políticas de ajuste "recomendadas" por los organismos internacionales, desechando toda posibilidad de modificar sus parámetros fundamentales, o habrá una huida masiva de los capitales invertidos en el país que producirá un colapso en la economía, con imprevisibles consecuencias sociales, institucionales y políticas. Esta forma de argumentar se emparenta, fuertemente, con otra variante que se funda en los intentos de mantener la supervivencia del denominado "pensamiento único". Se resume del siguiente modo: lo que proponemos es insuficiente, o injusto y generará resultados dudosos y controvertibles pero es lo mejor porque es lo único que tenemos; no existen propuestas alternativas.

## 6. EL ESCENARIO Y LA LÓGICA DE LA EXTORSIÓN POLITICA. EL GOLPE DE MERCADO

La actuación y la transmisión de la ideología "posibilista" reduce, como señalamos más arriba, los horizontes del pensamiento y la acción, produce impotencia e intenta congelar todo aquello que no sea competencia electoral llegando, en esa pretensión, hasta límites inimaginables. En la dinámica de los conflictos de baja intensidad que forman parte de la controversia política cotidiana, busca la descalificación de los argumentos "de otro", a través de una nueva y simple forma de extorsión: aquello que afirma, hace o pretende el adversario no es analizado por su contenido sino por sus efectos, pero no por los efectos buscados en esa proposición sino sobre otros, sobre las consecuencias, generalmente negativas, que sobre la paz social, la estabilidad económica y, muy especialmente, sobre el comportamiento de esos poderes intangibles e inmodificables que anidan en los mercados y fijan en cada circunstancia el límite de "lo posible".

El ejemplo más sintético de cómo se organiza esta estrategia extorsiva desde el mismo poder gubernamental, lo podemos hallar en recientes declaraciones del Presidente De la Rúa. Cuando tuvo que dar su opinión a los periodistas sobre un hecho meramente circunstancial, la suspensión del diálogo con el gobierno central adoptada por los gobernadores peronistas, a causa de la interrupción de los flujos financieros comprometidos por la Nación hacia las Provincias, eludió la sustancia de la cuestión, desestimó el análisis de sus causas y dijo: "lo único que se logra con estos planteos es poner nerviosos a los mercados y aumentar el riesgo país". De más está decir que bajo diversas variantes este tipo de argumentos, elusivo-extorsivos, son permanentemente reiterados, tanto con la palabra como con la acción, y aun con la omisión, por una enorme variedad de actores del elenco político gubernamental, en la más diversas circunstancias. El ejemplar más escandaloso de esta especie, lo aportó el economista neoliberal, G. Calvo, en un reportaje concedido en EE.UU., unos pocos días después. "Lo que ha aumentado el riesgo país en estos días han sido las caricaturas de Nik en el diario La Nación" (Clarín, 2001b).

Aunque se emparenta con el mensaje imposibilista

por sus objetivos, la variante extorsiva- apocalíptica se construye de un modo diferente; en lugar de eludir, alude de un modo explícito al contenido de las acciones, procedimientos, ideas y propuestas que pretende descalificar pero los deforma, le modifica su sentido y, sobre todo, magnifica sus efectos. La denominamos “interpretación apocalíptica” porque relaciona lo dicho o hecho por “el otro” con la generación de un futuro caótico, de desorden, descontrol, miseria y/o violencia social. El gobierno de la democracia invierte la secuencia tradicionalmente establecida entre la lucha política tomada como expresión y forma de resolución del conflicto social para transformarla en una nueva fuente generadora de frenos y obstáculos a la canalización política del conflicto social, mediante la amenaza y la extorsión que se desprende del mensaje apocalíptico. La actuación y la transmisión de la ideología “posibilista” reducen, como señalamos más arriba, los horizontes y produce impotencia, la amenaza de ingobernabilidad y caos social con su secuela de miseria y violencia incontrolable del mensaje apocalíptico se complementa con todo lo anterior, generando pánico e inanición.

Se desarrolla a partir de una de las pocas certezas que atormentan a sus interlocutores, la traumática sucesión de derrotas militares, sociales y políticas en las cuales quedó involucrada la mayoría de la sociedad, cuando no la sobrevivencia del entramado social mismo durante el transcurso de los últimos cuarenta años. Una superposición de experiencias profundamente negativas que ha venido generando una firme convicción fuertemente compartida: los valores supremos a resguardar son, después del ingreso y la ocupación, la seguridad y la armonía social, garantizadas por la gobernabilidad y la estabilidad institucional. Todo aquello que atente seriamente, de cualquier modo, contra esos objetivos logrados con ingentes sacrificios y vigentes ahora en medio de un clima de tolerancia y paz, son intolerables porque vuelven a ubicar en el horizonte los escenarios de la incertidumbre, la inestabilidad la inseguridad y el temor por el futuro.

La visión del apocalipsis se construye comprobando, primero, la desobediencia (es decir la transgresión de los límites de lo posible) y estableciendo, después, un vínculo simbólico casi directo entre esa transgresión y la amenaza de fuga de capitales al exterior, la descomposición económica, la desar-

articulación del sistema institucional y el comienzo de la disolución social. Todo producto de una presión no violenta que se ejerce desde el mercado por medios no coercitivos. Pero es una violencia legítima e inevitable porque aquello que puede ocurrir, la fuga y la desinversión, es producto del ejercicio legal de un derecho inalienable que la sociedad le ha otorgado al capital: la defensa unilateral de su integridad y sus beneficios dentro del marco exclusivo creado por las reglas que rigen el funcionamiento del mercado. La “ingobernabilidad” no es la consecuencia directa, entonces, como lo fue antaño, ni de la agudización del conflicto político, ni del crecimiento de las luchas sociales, proviene de las decisiones estratégicas que adopta el sector capitalista en su ámbito natural, el mercado. Pero el grado y el tipo de coerción institucional que produce depende de las características de lo que podríamos denominar “primeras causas” o “causas disparadoras”. De acuerdo a lo que hemos estado viendo, estas causas son generadas en dos ámbitos diferentes, unas provienen de la lucha social y política contra la expropiación y el despojo y, las otras, de las presiones que ejercen los inversores-especuladores del sector financiero para asegurar altas tasas y pagos puntuales y rigurosos de las obligaciones contraídas por el Estado. Teniendo en cuenta sus rasgos predominantes, a las primeras las denominamos causas sociales internas y, a las segundas, económicas externas.

Cuando esta forma de articulación entre discurso posibilista apocalíptico, presión del capital financiero y de los organismos internacionales y extorsión político-estatal llega a su máximo punto de tensión, se transforma en lo que varios analistas han denominado “golpe de mercado”, en el momento de tratar de analizar situaciones en que la voracidad capitalista se combina con la debilidad política del elenco corporativo para impulsar una mayor profundización de la estrategia neoliberal y producir desplazamientos acordes con ese objetivo en el plantel gubernamental. El discurso apocalíptico y el “chantaje” político se convierten, en tal caso, en los rostros visibles de un nuevo tipo de golpe de estado que no opera como una “invasión” externa sobre el sistema político y gubernamental, del tipo “golpe militar”, sino como un desplazamiento intrainstitucional que modifica la composición del elenco y/o las relaciones de fuerza existentes en el interior del Estado. Expulsión de unos, neu-

tralización y absorción de otros, encumbramiento del resto. En ese sentido, puede comenzar como un movimiento objetivo de capitales individuales, relativamente coordinado, pero que es convertido en un minigolpe de Estado por otros, los operadores políticos y económicos locales. Léase, grupos neoliberales insertados dentro y en las proximidades del Gobierno, neoliberales con gran acceso a medios de comunicación, reformistas posibilistas cínicos y reformistas posibilistas hipócritas asustados que sobreactúan sus gestos y acciones complacientes con los mercados y los organismos internacionales.

Como el círculo virtuoso prometido entre “sacrificio-inversión-crecimiento-beneficio del capital-deprime al resto de la sociedad” del esquema neoliberal nunca ha funcionado ni puede ser retóricamente justificado, los funcionarios y políticos comprometidos con ella han implementado una perversa estrategia alternativa que se basa en la transformación de las dificultades políticas y/o económicas recurrentes de los últimos tiempos en un nuevo tipo de crisis apocalípticas que le han permitido mantenerse vigentes, lograr la aprobación de complejos paquetes de reformas antipopulares e imponerlos por el miedo o por la complicidad de diversos sectores sociales y políticos, debidamente justificada por los reiterados “estados de excepción” en que ingresa periódicamente la Nación.

## BIBLIOGRAFÍA

- Acuña, A. (2000), *La nueva matriz política argentina*. Buenos Aires, Nueva Visión.
- Alfonsín, R. (2001), “Reportaje en Suplemento Zona del diario *Clarín*, 13 de mayo”.
- Basualdo, E. (2000), *Concentración y centralización del capital en la Argentina durante la década del noventa*. Buenos Aires, UNQUI/FLACSO/IDEP.
- Beinstein, J. (2000), “Es necesario y posible salir del desastre neoliberal”. *Le Monde diplomatique*, noviembre.
- Bonasso, M. (2000), *Página 12*, 25 de noviembre.
- Casullo, N. (2000), *Página 12*, 25 de noviembre.
- Calcagno, E; Calcagno, A (2000), “El precio de la convertibilidad”. *Le Monde diplomatique* del 8/II/2.000.
- “Nota sobre las declaraciones del economista G. Calvo en edición del 1 de mayo de 2001”. *Clarín*.
- De la Rúa, F. (2001), “Discurso del Presidente de la Nación, anunciando las nuevas medidas económicas en diario *Clarín*”, 18 de julio.
- Garretón, M. (1997), “Representatividad y partidos políticos”, en *Partidos políticos y representatividad en América Latina*. Editorial ILDIS/Nueva Visión.
- González, A. (2000), *Clarín*, 22 de noviembre.
- Granovsky, M. (2001), *El divorcio*. Buenos Aires, Editorial El Ateneo.
- Hagopian, F. (2000), “Democracia y representación política en América Latina en los años noventa: ¿pausa, reorganización o delinación?”, en E. Lopez; S. Mainwaring (comps), *Democracia: discusiones y nuevas aproximaciones*. Buenos Aires, UNQUI Ediciones.
- Liendo, H. (2001), *Página 12*.
- Nielsen, J. (2000), “La caballería polaca”. *Página 12*, 25 de noviembre.
- Notchef, H. (comp) (2001), *La economía argentina a fin de siglo: fragmentación presente y desarrollo ausente*. Buenos Aires, Flacso/Eudeba.
- Novaro, M. (1995), “El debate contemporáneo sobre la representación política”. *Desarrollo Económico*, XXXV-137.
- “ (1999), “Crisis y renovación de los partidos”, en *Entre el abismo y la ilusión*. Buenos Aires, Norma.
- Nudler, J. (2000), *Página 12*, 4 de noviembre.
- O’Donnell, G. (2000), *Página 12*, 15 de octubre.
- “ (2001), “El capital financiero y el futuro de la democracia”. *Página 12*, 21 de marzo.
- Paramio, L. (1993), “Consolidación democrática, desafección política y neoliberalismo”. *Cuadernos del CLAEH*, 61.
- Pasquini Durán, J. (2001), “Protagonistas”. *Página 12*, 9 de junio.
- Pucciarelli, A. (2000), “¿Democracia impotente o cómplice?”. *Sociedad*, 16.
- Scavino, D. (1999), *La era de la desolación*. Buenos Aires, Editorial Manantial.
- Terragno, R. (2000a), *Página 12*, 1 de noviembre.
- “ (2000b), “Hay resignación”. *Página 12*, 29 de noviembre.
- Verbizky, H. (2000), “El corte”. *Página 12*, 29 de octubre.
- “ (2001) “Se acortan los plazos para decidir entre devaluación y dolarización”. *Página 12*, 8 de mayo
- Zermeño, S. (1989), “El regreso del líder: crisis, neoliberalismo y desorden”. *Revista Mexicana de Sociología*, 3